Caso: Lean Casas Cordero con Director Nacional de Aduanas (primera instancia)

JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Valparaíso; Prat 779

ROL : C-3767-2004

CARATULADO : CASAS CORDERO/ NO CORRESP.

Valparaíso, jueves diecisiete de marzo de dos mil cinco

VISTO:

A fs. 1. Carlos Eric Lean Casas Cordero, Chileno, empresario y, Jaime Lean Mrida, chileno, empresario, ambos por sí y en representación de la sociedad “Artículos de Seguridad Masprot Comercial e Industrial Ltda”, todos domiciliados en C. Walker Martínez N° 5574, San Miguel, Santiago; deducen la acción de amparo de acceso a información pública en contra del Director Nacional del Servicio de Aduanas, don Raúl Allard Neumann, solicitando se aplique una multa al recurrido por infracción al procedimiento administrativo que regula el derecho de acceso a información pública; declarar la nulidad del D.S. N° 26 de Mayo de 2001 y la Resolución N° 2305 de la Presidencia de fecha 7 de Mayo del 2001 y la Resolución N° 2305 de la Dirección Nacional de Aduanas, de 4 de Julio del 2002, disponiéndose que la información solicitada sea puesta a su disposición fijando un plazo prudencial para ello, con costas.

Fundamenta su acción en que la sociedad aludida, se dedica principalmente a la elaboración de una mascarilla antitóxica utilizada en procesos industriales, mineros y bacteriológicos cumpliendo con estándares de calidad internacional idénticos a los utilizados por compañías transnacionales como son MSA USA y 3M; que las particulares características del mercado han incidido negativamente en el orden público que regula la libre competencia en el país, que se traduce en asimetrías profundas en los precios ofrecidos por la industria nacional y la extranjera, que, mediante una investigación durante los últimos 24 años, concluyen que las distorsiones en los precios de venta del producto importado con aquel producido por la industria nacional, obedece a rebajas al valor de importación y errores en la rotulación de los productos internados al país por la industria extranjera y que son necesarios para elaborar la mascarilla indicada. Que, con fecha 29 de Marzo de 2003, Masprot Ltda. formuló –vía correo electrónico- denuncia al Sr. Director Nacional de Aduanas, dando origen a un procedimiento de fiscalización y

control. Que, mediante Ord. N° 004552 de fecha 7 de Mayo de 2003, el Director Nacional de Aduanas, señaló no haber encontrado antecedentes que sustentaran la denuncia interpuesta, sin perjuicio de lo cual, impartió instrucciones a la Subdirección de Fiscalización para que realizara un análisis a fin de detectar inconsistencias de los valores declarados en el universo de los productos importados por las empresas denunciadas. Que, se solicitó acceso a los resultados de los análisis realizados y al no obtener respuesta, se solicitó la intervención de la Comisión Asesora Presidencial para los Derechos de las Personas, la cual, mediante ordinarios N° 177 de 14 de Junio de 2004 y N° 211 del 12 de Julio de 2004, requirió al Director Nacional de Aduanas dar respuesta a la solicitud de acceso, lo que se produjo mediante Ordinario N° 008520 de fecha 2 de Septiembre de 2004, señalándose que respecto a la solicitud de antecedentes se “solicitó informe a la Subdirección Jurídica del Servicio, señalando esta que tales antecedentes tienen carácter de reservados, conforme al inciso undécimo del artículo 13 de la Ley 18.575, en concordancia con los artículos 8 letra b) N° 5 del Decreto Supremo N° 26 del año 2001 del Ministerio de Hacienda y el punto 2.2.5 de la Resolución N° 2.305 de la Dirección Nacional de Aduanas, por constituir información de carácter económico y financiero de las empresas denunciadas y se refieren a operaciones aduaneras individuales de las citadas empresas”.

En cuanto al derecho, invoca el DFL N° 1/19.653 que fijó el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, de fecha 17 de Noviembre de 2001, artículos 3º y 53 de dicha ley, que ha sido reforzado por la ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Señala, además, que el artículo 14 de la ley N° 18.575 establece el procedimiento administrativo de solicitud de acceso que, ante la negativa o el retardo en la entrega, incluye un procedimiento especial ante la justicia ordinaria y el retardo y resistencia del Director Nacional de Aduanas en dar cumplimiento a su obligación de respuesta y la falta de integridad de la misma, constituyen una infracción grave al artículo 13 de la ley N° 18.575.

Denuncia, además, los insubsanables vicios de constitucionalidad que afectan al D.S. N° 26 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de fecha 7 de Mayo de 2001 y Resolución N° 2.305 de la Dirección Nacional de Aduanas, de 4 de Julio de 2002, por tratarse de actos administrativos nulos de derecho público, esto por cuanto, el artículo 19 N° 12 de la Constitución y

el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, aseguran a todas las personas la libertad de información.

Señala que, la Contraloría General de la República, mediante dictamen N° 049883 de 4 de Octubre de 2004, ordena a todos los servicios públicos que hayan dictado resoluciones invocando el artículo 9 del Reglamento sobre Secreto o Reserva a reexaminar y modificar las mismas. Además, el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, tratado suscrito y ratificado por nuestro país, recomendó al Estado de Chile la modificación de la ley y la norma reglamentaria. En el mismo sentido, el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado su preocupación por la situación descrita en su informe anual del año 2003.

Que, la denuncia formulada amerita el ejercicio de oficio de las competencias jurisdiccionales conferidas en los artículos 6, 73 inciso 2º de la Constitución Política, en concordancia con las obligaciones que emanan del artículo III N° 11 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, artículo 2 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 5 de la Carta Fundamental.

Que, la ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, también establece niveles de publicidad de las empresas sometidas a su fiscalización, cuyos principios pueden considerarse como parámetros en esta causa.

Por último, señala que la seguridad jurídica es un derecho que asegura el artículo 19 N° 26 de la Carta Fundamental, que considera la certeza del derecho y la protección de la confianza de quienes desarrollan su actividad con sujeción a sus principios y normas positivas.

A fs. 22, el recurrido solicita que se declare extemporáneo el recurso de Amparo de Acceso a Información, o fallado en el fondo, rechazarlo en todas sus partes, toda vez que el Director Nacional de Aduanas se encuentra legal y reglamentariamente imposibilitado de acceder a la información requerida, con expresa condenación en costas.

En cuanto a la extemporaneidad del recurso, señala que, si bien aparentemente no existiría un plazo legal para su interposición, ello resulta un absurdo que atenta contra el principio de estabilidad del ordenamiento jurídico y de la economía procesal, por lo que estima debe ejercerse dentro del plazo de quince días establecido para el recurso de protección, recurriéndose así a una interpretación de la norma legal, o, en subsidio, en el plazo establecido para el amparo económico.

En cuanto al fondo, señala que, la negativa del Director Nacional de Aduanas para acceder a la documentación solicitada por el reclamante, tiene su fundamento preciso y concreto en los artículos 6 de la Ordenanza de Aduanas, 10 del Acuerdo de Valoración OMC, 13 de la ley 18.575 y el 9º del Decreto Supremo Nº 26-01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y resolución Nº 2305.

Que, en cuanto a la inconstitucionalidad y legalidad del estatuto reglamentario, señala que no es este el procedimiento establecido para verificar la constitucionalidad de una norma jurídica. Que, no obstante, quedó reconocida la legalidad de la resolución 2.305 con ocasión del recurso de protección ROL 459-02.

Que, en cuanto a la afectación sensible de intereses de terceros, la denuncia que da origen a las investigaciones, se refiere principalmente a valoración de mercancía, antecedentes que inciden directamente en la competitividad del producto en el mercado y por lo tanto se encuentra protegido por la reserva.

A fs.38, se citó a las partes a oír sentencia:

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO: Que, la parte recurrida objeta a fojas 22, los documentos acompañados por la recurrente signados con los números 7, 8, 21, 22, 35; y los documentos contemplados en el número 9 letra b) a g), ambas inclusive, los primeros por tratarse de copias de documentos cuya autenticidad o integridad no consta y no emanan del Servicio Nacional de Aduanas , y los segundos por no constar su autenticidad ni integridad. Que al respecto en fojas 35 se tuvieron por objetados sin perjuicio del valor probatorio que se les pudiera asignar en definitiva.

EN CUANTO AL FONDO:

SEGUNDO: Que, Carlos Eric Lean Casas Cordero, Chileno, empresario y, Jaime Lean Mrida, Chileno, empresario, ambos por sí y en representación de la sociedad "Artículos de Seguridad Masprot Comercial e Industrial Ltda.", todos domiciliados en C. Walker Martínez N° 5574, San Miguel, Santiago. Deducen la acción de amparo de acceso a información pública en contra del Director Nacional del Servicio de Aduanas, don Raúl Allard Neuman. Solicitan se aplique una multa al recurrido por infracción al procedimiento administrativo que regula la nulidad del D.S. N° 26 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia de fecha 7 de Mayo del 2001 y la Resolución N° 2305 de la Dirección Nacional de Aduanas, de 4 de Julio del 2002, disponiéndose que la información solicitada sea puesta a su disposición fijando un plazo prudencial para ello, con costas.

Funda su acción en que la sociedad aludida se dedica, principalmente, a la elaboración de una mascarilla antitóxica utilizada en procesos industriales, mineros y bacteriológicos cumpliendo con estándares de calidad internacional idénticos a los utilizados en procesos industriales, mineros y bacteriológicos cumpliendo con estándares de calidad internacionales como MSA USA y 3M; que las particulares características del mercado han incidido negativamente en el orden público que regula la libre competencia en el país, que se traduce en asimetrías profundas en los precios ofrecidos por la industria nacional y la extranjera; que, mediante una investigación, durante los últimos 24 años, concluye que las distorsiones en los precios de venta del producto importado con aquel producido por la industria nacional, obedece a rebajas al valor de importación y errores en la rotulación de los productos internados al país por la industria extranjera y que son necesarios para elaborar la mascarilla indicada; que, con fecha 29 de Marzo de 2003, Masprot Ltda. formuló - vía correo electrónico - denuncia al Sr. Director Nacional de Aduanas, dando origen a un procedimiento de fiscalización y control; que, mediante Ord. N° 004552, de fecha 7 de Mayo de 2003, el Director Nacional de Aduanas, señaló no haber encontrado antecedentes que sustentaran la denuncia interpuesta sin perjuicio de lo cual, impartió instrucciones a la Subdirección de Fiscalización para que realizara un análisis a fin de detectar inconsistencias de los valores declarados en el universo de los productos importados por las empresas denunciadas; que se

solicitó acceso a los resultados de los análisis realizados y al no obtener respuesta, se solicitó la intervención de la Comisión Asesora Presidencial para los Derechos de las Personas, la cual, mediante ordinarios N° 177 de 14 de Junio de 2004 y N° 211 del 12 de Julio de 2004, requirió al Director Nacional de Aduanas dar respuesta a la solicitud de acceso, lo que se produjo mediante Ordinario N° 008520 de fecha 2 de Septiembre de 2004, indicándose que respecto a la solicitud de antecedentes se solicitó informe a la Subdirección Jurídica del Servicio; que esta señaló que tales antecedentes tienen el carácter de reservados, conforme el inciso undécimo del artículo 13 de la Ley 18.575, en concordancia con los artículos 8 letra b) N° 5 del Decreto Supremo N° 26 del año 2001 del Ministerio de Hacienda y el punto 2.2.5 de la Resolución N° 2.305 de la Dirección Nacional de Aduanas, por constituir información de carácter económico y financiero de las empresas denunciadas y referirse a operaciones aduaneras individuales de las citadas empresas.

En cuanto al derecho, invoca el DFL N° 1/19.653 que fijó el Texto Refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, de fecha 17 de Noviembre de 2001. Hace presente que el artículo 3° expresa que la Administración está al Servicio de la persona humana y que su finalidad es promover el bien común así como el deber de garantizar la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Constitución Política y las leyes; que por su parte el artículo 53 de dicha ley exige el empleo de medios idóneos para un correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas en el acceso a información en conformidad a la ley, cuerpo formativo que ha sido reforzado por la ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado y que, en su artículo 3°, define el acto administrativo como “las decisiones formales que emiten los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública”. Señala, además, que el artículo 14 de la ley N° 18.575 establece el procedimiento administrativo de solicitud de acceso que, ante la negativa o el retardo en la entrega, incluye un procedimiento especial ante la justicia ordinaria. Agrega que existen causales de reserva legal que se encuentran taxativamente establecidas en el artículo 13 inciso 11 de dicha ley; que exigen acreditar un umbral de daño que sopase el interés público de transparencia y publicidad; que el oficio N° 008520 del Director Nacional de Aduanas vulneraría el Estatuto de Acceso a Información Pública.

Que, su representada, hizo ejercicio del derecho de acceso a información pública solicitando copia de los antecedentes que sustentan el oficio N° 4522/2003 de 7 de Mayo de 2003, que contiene la resolución y fundamentos del procedimiento administrativo incoado por el Servicio de Aduanas ante la denuncia presentada con fecha 28 de Marzo de 2003, que, ante la inercia del Director Nacional de Aduanas de dar respuesta a su solicitud y vencido el plazo de 48 horas contenido en el artículo 13 inciso 9 de la ley N° 18.575 se requirió la intervención del Presidente de la Comisión Asesora Presidencial para los Derechos de las Personas; que este en dos oportunidades representó al recurrido la urgencia de dar respuesta, lo que se concretó casi 3 meses después mediante oficio Ord. N° 008520, lo que no les fue comunicado conforme obliga la ley. Que la reserva, esgrimida por el Director de Aduanas, para negar el acceso se funda en que los antecedentes requeridos contendrían información de carácter económico y financiero de las empresas denunciadas. Que, conforme el inciso 10 y 11 del artículo 13 de la ley 18.575, obligan al Jefe de Servicio a formular por escrito la “calificación fundada”, la que debe ser comunicada íntegramente al requirente. Añade que dicha calificación se encuentra contenida en el informe de la Subdirección Jurídica, oficio N° 1039 de 16 de Agosto de 2004, el que no se acompaña, y que no ha sido comunicado a su representado. Que, dicho retardo y resistencia del Director Nacional de Aduanas en dar cumplimiento a su obligación de respuesta y la falta de integridad de la misma, constituyen una infracción grave al artículo 13 de la ley N° 18.575, otorgándose al Juez la facultad de sancionar con multa el actuar de la autoridad, conforme lo dispone el artículo 14 inciso 5º del mismo cuerpo legal.

Denuncia. Además, los insubsanables vicios de constitucionalidad que afectan al D.S. N° 26 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de fecha 7 de Mayo de 2001 y Resolución N° 2.305 de la Dirección Nacional de Aduanas. De 4 de Julio de 2002. por tratarse de actos administrativos nulos de derecho público: que el derecho de acceso a información pública constituye una facultad que emana de la libertad de información. Consagrada en el artículo 19 N° 12 de la constitución y el artículo 13 del pacto de San José de Costa Rica. Que el administrador, vía reglamentaria, ha configurado un estatuto de secreto y reserva. disperso y paralelo que revierte la presunción de apertura a que obligan la constitución. La ley y los tratados internacionales, reemplazándola por el secreto y la reserva como el “interés público” a proteger.

Señala que la Contraloría General de la República mediante dictamen N° 049883 de 4 de Octubre de 2004, ordena a todos los servicios públicos que hayan dictado resoluciones invocando el artículo 9 del Reglamento sobre Secreto o Reserva reexaminar y modificar las mismas. Además, el comité de expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, tratado suscrito y ratificado por nuestro país, recomendó al Estado de Chile la modificación de la ley y la norma reglamentaria. En el mismo sentido el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por la situación descrita en su informe anual del año 2003. Que la denuncia formulada amerita el ejercicio de oficio de las competencias jurisdiccionales conferidas en los artículos 6 y 7 inciso 2º de la Constitución Política, en concordancia con las obligaciones que emanan del artículo III N° 11 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y 5 de la Carta Fundamental para declarar las nulidades solicitadas.

Hace presente que el interés económico y financiero no es absoluto y se limita a proteger las informaciones y documentos referidos al buen funcionamiento de las empresas como son los procedimientos de fabricación, los de investigación y el "saber hacer" -know how-. se extiende a las formativas sectoriales sobre propiedad intelectual económica, a su salud financiera y a su crédito.

Que la ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores. también establece niveles de publicidad de las empresas sometidas a su fiscalización cuyos principios pueden considerarse como parámetros en esta causa. Que la negativa de acceso al procedimiento administrativo generado conforme la denuncia de 28 de marzo de 2003, su resolución, fundamentos y antecedentes solicitados con fecha 18 de mayo del año 2004 infringió el estatuto de acceso a la información pública.

Por último, señala que la seguridad jurídica es un derecho que asegura el artículo 19 N° 26 de la Carta Fundamental que considera la certeza del derecho y la protección de la confianza de quienes desarrollan su actividad con sujeción a sus principios y normas positivas.

TERCERO: que el recurrido solicita que se declare extemporáneo el recurso de Amparo de Acceso a Información o, fallado en el fondo, rechazarlo en todas sus partes, toda vez que el

Director Nacional de Aduanas se encuentra legal y reglamentariamente imposibilitado de acceder a la información requerida, con expresa condenación en costas.

En cuanto a la extemporaneidad del recurso, señala que, si bien, aparentemente no existiría un plazo legal para su interposición, ello resulta un absurdo que atenta contra el principio de estabilidad del ordenamiento jurídico y de la economía procesal; que estima debe ejercerse dentro del plazo de quince días establecido para el recurso de protección de la norma legal, o, en subsidio, en el plazo establecido para el amparo económico.

En cuanto al fondo señala que la negativa del Director Nacional de Aduanas para acceder a la documentación, solicitada por la reclamante, tiene su fundamento preciso y concreto en los artículos 6ª de la Ordenanza de Aduanas, que establece que “las informaciones entregadas al Servicio de Aduanas u obtenidas por este en el ejercicio de atribuciones legales no podrán entregarse a terceros cuando tengan el carácter de reservados”; en el artículo 10 del Acuerdo sobre valoración de la Organización Mundial de Comercio, que señala que “toda información que por su naturaleza sea confidencial de la valoración en aduana será considerada como estrictamente confidencial por las autoridades pertinentes . . .”; en el artículo 13 de la ley 18.575, que señala que “las únicas causales en cuya virtud se podrá denegar la entrega de documentos o antecedentes requeridos son la reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias”, señalando entre estas el que “los antecedentes requeridos afecte sensiblemente los derechos o intereses de terceras personas, según calificación fundada por el jefe superior del órgano requerido”; que al respecto, se dicta el correspondiente reglamento, mediante Decreto N° 26/01, el que, en su artículo 8º letra a) N° 7 señala de secreto o reserva basada en la protección de intereses públicos, procederá respecto de los actos y documentos cuya comunicación o conocimiento perjudique la investigación por los servicios públicos competentes de los delitos y las infracciones administrativas, tributarias o aduaneras”; que, por su parte, el artículo 9º de dicho decreto señala que “los órganos de la administración del Estado deberán clasificar los actos y documentos como secretos o reservados, de conformidad a los criterios establecidos en el artículo precedente, en atención al grado de protección que requieran”, añadiendo, que “corresponderá al respectivo Jefe de Servicio, mediante resolución fundada, determinar los actos y antecedentes de la institución u órgano del Estado que estarán afectos al secreto o reserva”.

Que, en cuanto a la inconstitucionalidad y legalidad en la dictación de la resolución 2.305/2002, señala que no es este el procedimiento establecido para verificar la constitucionalidad de una norma jurídica, que, no obstante, quedó reconocida la legalidad de la resolución 2.305 con ocasión del recurso de protección ROL 459 – 02 interpuesto ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta Ciudad.

Que en cuanto a la afectación sensible de intereses de terceros, la denuncia que da origen a las investigaciones, se refieren principalmente a valoración de mercancía, antecedentes que inciden directamente en la competitividad del producto en el mercado y por lo tanto se encuentra protegido por la reserva.

CUATRO: Que el actor acompañó documentos guardados en la custodia del tribunal y que se han tenido a la vista.

QUINTO: Que del merito de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley N° 18.575 se desprende que no existe plazo legal para interponer la acción, materia de autos, por lo que se desestimaré la alegación de extemporaneidad.

SEXTO: Que la controversia se circunscribe a determinar si la negativa del Servicio Nacional de Aduanas de dar acceso a la documentación, solicitada por la recurrente, posee fundamento legal.

Al respecto, el artículo 13 de la Ley 18.575 establece el principio de probidad administrativa, señalando que la función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento que se adopten en ejercicio de ella; que son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, contemplando un procedimiento para el evento que la información no se encuentre a disposición del público, y además, determina las causales en cuya virtud se pueda denegar la entrega de los antecedentes o documentos, a saber: reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias; que la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido: la oposición deducida en tiempo y forma por los terceros a quienes afecte la información; que la divulgación de

antecedentes o documentos afecte sensiblemente los derechos o intereses de terceras personas y que la publicidad afecte la seguridad o el interés nacional.

SÉPTIMO: Que, por su parte, el Reglamento sobre el Secreto o Reserva de los Actos y Documentos de la Administración del Estado, contenido en el Decreto N° 26 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia establece que la función pública se ejerce con transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en el ejercicio de ella señalando que son los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo o esencial con excepción de aquellos documentos y antecedentes declarados secretos o reservados, agregando el artículo 8º de dicho cuerpo legal, que podrán tener tal carácter aquellos cuyo conocimiento o difusión pueda afectar el interés público o privado de los administrados, de conformidad a criterios basados en: a) Protección de interés público respecto de actos y documentos relativos a defensa y seguridad nacional, política exterior o relaciones internacionales, política monetaria y divisas, moneda y crédito público, orden público, prevención y represión de la criminalidad, desarrollo de procedimientos jurisdiccionales, actuaciones preliminares o preparativas de aquellos que la ley encomiende a organismos de la Administración, investigación de los servicios públicos competentes de los delitos o infracciones administrativas, tributarias o aduaneras, ejercicio de la acción administrativa del órgano administrativo requerido y la correspondencia oficial; y b) Documentos de carácter nominativo, los que afecten la vida privada de una persona, los expedientes relativos a procedimiento sancionatorios o disciplinarios, los expedientes médicos o sanitarios y los que contengan secretos industriales y comerciales, incluyendo a los procedimientos de fabricación, las informaciones económicas y financieras, y las estrategias comerciales; correspondiente al Jefe Superior de Servicio, mediante resolución fundada, determinarlos en tal calidad.

OCTAVO: Que, por último, la resolución 2.305 de 28 de Junio de 2002, dictada por el Servicio Nacional de Aduanas, publicada en el Diario Oficial con fecha 4 de Julio del mismo año, califica documentos reservados emanados de dicho Servicio, utilizando criterios de Protección del interés público y privado.

NOVENO: Que, de la respuesta dada por el recurrido, mediante oficio Ord. N° 8.520 de fecha 2 de Septiembre de 2004, se desprende que su negativa a proporcionar la documentación

solicitada por el recurrente, se basa en que dichos documentos tienen el carácter de reservados conforme con el inciso undécimo del artículo 13 de la ley 18.575 en concordancia con los artículos 8 letra b) N° 5 del Decreto Supremo N° 26 del año 2001 del Ministerio de Hacienda y el punto 2.2.5 de la Resolución N° 2305 del 2002 de dicha Dirección Nacional, por constituir información de carácter económico y financiero de las empresas denunciadas y referirse a operaciones aduaneras individuales de dichas empresas.

DECIMO: Que, del análisis de los antecedentes y legislación aplicable, no se puede concluir que la información solicitada tenga el carácter de reserva como lo manifestó el Director Nacional de Aduana; que la solicitud sólo se ha referido a los antecedentes que se recopilaron y valoraron para emitir la conclusión a la que se arribó en la investigación ordenada por precitado Director y por la cual, en mayo del 2003, por ordinario 4552, comunicó al actor la inexistencia de algún antecedente que pudiera sustentar su denuncia. A mayor abundamiento los antecedentes de la investigación serán los que, en definitiva, permitan al actor una mejor defensa de los derechos que sostiene que han sido lesionados.

DECIMO PRIMERO: Que, dado lo anterior, se estima que la negativa del Servicio Nacional de Aduanas vulneró el legítimo ejercicio del derecho de acceso a la información solicitada y contenida en el artículo 13 de la Ley orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado por lo que se acogerá el amparo intentado.

DECIMO SEGUNDO: Que, la solicitud de la recurrente de declarar nulo el D.S. N° 26 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de fecha 7 de Mayo del 2001 y la Resolución N° 2.305 de la Dirección Nacional de Aduanas, de 4 de Julio de 2002 se desestimarán por estimarse que este no es el Procedimiento ni la vía para verificar la constitucionalidad de una norma jurídica.

DECIMO TERCERO: Que siendo facultativo, para el Juez de la causa, aplicar una multa al Jefe del Servicio, de conformidad al artículo 14 de la Ley 18.575, y estimándose que no hay antecedentes para ello no se dará lugar.

DECIMO CUARTO: Que los documentos que no se analizan, en particular, en nada influyen en lo dispositivo del fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley 18.575: Decreto N° 26/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Resolución 2.305 de la Dirección Nacional de Aduanas, se declara:

1.- Que se acoge la reclamación deducida, en lo principal de fojas 1. solo en cuanto se ordena que la documentación solicitada por oficio de 18 de mayo de 2004, que respalda la conclusión a que se arriba y que fuere comunicada al actor por oficio 4552 de 7 de mayo de 2003, emanado del Director Nacional de Aduanas, sea puesta a disposición de la reclamante dentro del plazo de 10 días, contados desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

2.- Que, no se condena al Servicio Nacional de Aduanas al pago de una multa.

3.- Que se rechaza el referido reclamo en cuanto a declarar la nulidad del Decreto Supremo N° 26 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de mayo del 2001 y la Resolución N° 2305 de la Dirección Nacional de Aduanas de 4 de Julio del 2002.

4.- Que, no se condena en costas al recurrido de amparo.

Notifíquese, regístrese y archívese los antecedentes en su oportunidad.

Dictada por doña Norma Carrasco Parra, Juez Letrado Titular

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del Art. 162 del C.P.C. en Valparaíso, a jueves diecisiete de mayo de dos mil cinco.